



## Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general  
27 de noviembre de 2012  
Español  
Original: inglés

---

### Comité de Derechos Humanos

### Comunicación N° 1821/2008

**Dictamen aprobado por el Comité en su 106° período de sesiones  
(15 de octubre a 2 de noviembre de 2012)**

<i>Presentada por:</i>	Sholam Weiss (representado por Jonathan Cooper)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado parte:</i>	Austria
<i>Fecha de la comunicación:</i>	12 de mayo de 2008 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 28 de noviembre de 2008 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de aprobación del dictamen:</i>	24 de octubre de 2012
<i>Asunto:</i>	Extradición a un país en el que la persona se enfrenta a prisión perpetua
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Derecho de apelación; trato inhumano y degradante por la duración y la desproporcionalidad de una condena
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Condición de víctima, admisibilidad <i>ratione loci</i> y agotamiento de los recursos internos
<i>Artículos del Pacto:</i>	7 y 14, párrafo 5
<i>Artículos del Protocolo Facultativo:</i>	1 y 5, párrafo 2 b)

## Anexo

### **Dictamen del Comité de Derechos Humanos a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (106º período de sesiones)**

respecto de la

#### **Comunicación N° 1821/2008\***

<i>Presentada por:</i>	Sholam Weiss (representado por Jonathan Cooper)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado parte:</i>	Austria
<i>Fecha de la comunicación:</i>	12 de mayo de 2008 (presentación inicial)

*El Comité de Derechos Humanos*, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Reunido* el 24 de octubre de 2012,

*Habiendo concluido* el examen de la comunicación N° 1821/2008, presentada al Comité de Derechos Humanos por el Sr. Sholam Weiss en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Habiendo tenido en cuenta* toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado parte,

*Aprueba* el siguiente:

#### **Dictamen a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo**

1.1 El autor de la comunicación, de fecha 12 de mayo de 2008, es Sholam Weiss, ciudadano de los Estados Unidos de América y de Israel, nacido el 1º de abril de 1954. Afirma que Austria, al extraditarlo a los Estados Unidos, donde no tendría derecho a recurrir su condena a prisión perpetua, ha violado el artículo 7 y el artículo 14, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El autor está representado por Jonathan Cooper<sup>1</sup>.

---

\* Participaron en el examen de la presente comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Yadh Ben Achour, Sra. Christine Chanet, Sr. Cornelis Flinterman, Sr. Yuji Iwasawa, Sr. Walter Kälin, Sra. Iulia Motoc, Sr. Michael O'Flaherty, Sr. Rafael Rivas Posada, Sr. Nigel Rodley, Sr. Fabián Omar Salvioli, Sr. Marat Sarsembayev, Sr. Krister Thelin y Sra. Margo Waterval. De conformidad con el artículo 91 del reglamento del Comité, el miembro del Comité Sr. Gerald L. Neuman no participó en la aprobación del presente dictamen.

<sup>1</sup> El Pacto y el Protocolo Facultativo entraron en vigor para Austria el 10 de diciembre de 1978 y el 10 de marzo de 1988, respectivamente.

1.2 El 3 de abril de 2003, el Comité aprobó su dictamen sobre la comunicación N° 1086/2002 presentada por el autor, en la que este afirmaba, entre otras cosas, que su extradición a los Estados Unidos había vulnerado las disposiciones del Pacto arriba mencionadas, ya que en ese país fue declarado culpable y condenado en rebeldía y no tuvo una oportunidad efectiva de recurrir la declaración de culpabilidad y la condena. Sobre la base de la información de que disponía, el Comité consideró que, dado que la declaración de culpabilidad y la pena impuesta en los Estados Unidos todavía no eran definitivas, era prematuro que el Comité determinara, fundándose en hechos hipotéticos, si esa situación daba o no lugar a responsabilidad del Estado parte en virtud del Pacto. Sin embargo, el Comité sí determinó que se había infringido el artículo 14, párrafo 1, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, puesto que la extradición se había llevado a cabo contraviniendo una orden de suspensión dictada por el Tribunal Administrativo de Austria y el autor había sido privado de su derecho a recurrir un fallo adverso del Tribunal Superior Regional de Austria. El Comité llegó a la conclusión de que el Estado parte estaba obligado a dirigir a las autoridades de los Estados Unidos los requerimientos que fueran necesarios para que el autor no sufriera ninguna conculcación de los derechos que le asisten en virtud del Pacto como resultado de su extradición por el Estado parte en violación de las obligaciones que le impone el Pacto<sup>2</sup>.

1.3 En la comunicación que se examina, el autor reitera sus denuncias —a las que no se refirió el Comité en su dictamen sobre la comunicación N° 1086/2002—, en el sentido de que su extradición entrañó la violación del artículo 7 y del artículo 14, párrafo 5, del Pacto, y afirma que, habida cuenta de las actuaciones realizadas en los Estados Unidos, esas denuncias ya no se basan en hechos hipotéticos.

#### **Antecedentes de hecho**

2.1 En un juicio que empezó el 1° de noviembre de 1998 en el Tribunal de Distrito de Florida, el autor fue juzgado por numerosos cargos de fraude, extorsión y blanqueo de dinero<sup>3</sup>. Durante todo el juicio estuvo representado por un abogado de su elección. El 29 de octubre de 1999, cuando estaban a punto de comenzar las deliberaciones del jurado, el autor abandonó la sala y se dio a la fuga. El 1° de noviembre de 1999 fue declarado culpable de todos los cargos. Tras examinar los argumentos de la fiscalía y la opinión contraria del abogado del autor sobre si se debía dictar sentencia en rebeldía de este, finalmente el 18 de febrero de 2000 el tribunal lo condenó en rebeldía a 845 años de prisión (con la posibilidad de rebajar la pena a 711 años) y a penas pecuniarias superiores a 248 millones de dólares de los Estados Unidos.

2.2 El abogado del autor presentó un escrito de apelación dentro del plazo de diez días fijado por la ley. El 10 de abril de 2000, el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito de los Estados Unidos rechazó la petición del abogado del autor de que se aplazase la desestimación del recurso, basándose en la doctrina según la cual el acusado que se da a la fuga pierde sus derechos. Con arreglo a esa doctrina, un tribunal de apelación puede rechazar un recurso interpuesto por un prófugo por el mero hecho de que el apelante se haya dado a la fuga. Con esa decisión, concluyó el proceso penal contra el autor en los Estados Unidos.

<sup>2</sup> Comunicación N° 1086/2002, *Weiss c. Austria*, dictamen aprobado el 3 de abril de 2003, párr. 11.1.

<sup>3</sup> En la decisión no motivada que adoptó el Tribunal del Distrito Medio de Florida (División de Ocala) con fecha 15 de diciembre de 2008 y que el Estado parte presentó en su observación de 30 de enero de 2009, el juez señala que el autor fue inculcado de numerosos cargos relacionados con la Ley contra la delincuencia organizada (RICO), por blanqueo de dinero y por otros delitos vinculados con la quiebra de la National Heritage Life Insurance Co.

2.3 El 24 de octubre de 2000, el autor fue detenido en Viena (Austria) en virtud de una orden de detención internacional, y el 27 de octubre de 2000 fue trasladado a un centro de detención en espera de extradición. El 18 de diciembre de 2000, los Estados Unidos presentaron al Estado parte una solicitud de extradición del autor. El autor afirma que, en su respuesta, el Estado parte pidió a los Estados Unidos que, conforme a los artículos 9 y 11 del tratado de extradición suscrito por ambos países, le dieran garantías de que, tras la extradición, el autor podría ejercer el derecho de plena apelación contra su declaración de culpabilidad y su condena. El autor indica que, en cartas de 8 de febrero y 14 de mayo de 2002, los Estados Unidos dieron al Estado parte garantías de que, si el autor era extraditado y Austria rechazaba uno o varios de los cargos penales por los que el solicitante había sido condenado, con arreglo al principio de especialidad el magistrado estadounidense que presidiera el tribunal debería sentenciarlo de nuevo, y que esa nueva sentencia permitiría al autor recurrir tanto la declaración de culpabilidad como la condena. Las garantías, contenidas en la carta de fecha 14 de mayo de 2002, decían lo siguiente:

1) Garantía relativa a la legislación de los Estados Unidos: "Si Weiss es extraditado a condición de que no sea castigado por delitos relacionados con falsos testimonios a funcionarios públicos o en procesos judiciales, el magistrado de los Estados Unidos que presida el tribunal deberá dictar una nueva sentencia para dar cumplimiento a esa condición".

2) Garantía dimanante de la opinión de expertos, basada en la garantía N° 3, relativa a la legislación de los Estados Unidos: "En nuestra opinión, esto haría que Weiss pudiera presentar una apelación plena sobre todas las cuestiones planteadas, incluidos el veredicto de culpabilidad, los errores cometidos durante el juicio, las cuestiones de constitucionalidad y su condena".

3) Garantía relativa a la legislación estadounidense: "Según la legislación estadounidense, el acusado no puede apelar por separado contra el veredicto y contra la condena. Toda apelación se interpone contra la sentencia definitiva, que comprende tanto la declaración de culpabilidad como la imposición de la pena".

4) Garantía relativa a las futuras actuaciones de los Estados Unidos ante los tribunales: "Además, en cualquier proceso incoado ante cualquier tribunal estadounidense, los Estados Unidos adoptarían la posición de que la nueva sentencia permitiría a Weiss recurrir tanto el veredicto de culpabilidad como la condena".

2.4 Después de reconsiderar la cuestión, el 8 de mayo de 2002 el Tribunal Superior Regional de Austria resolvió que la extradición del autor era admisible en lo que se refería a todos los cargos excepto el de "perjurio en un proceso en su contra" (el denominado cargo 93 en el acuerdo, por el que el autor había sido condenado a diez años de prisión), basándose en que en Austria no existía un delito equivalente.

2.5 El Tribunal Superior Regional de Austria señaló en su fallo que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la extradición a un país en que el acusado podía ser condenado a la pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional podía plantear cuestiones en relación con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal agregó que, no obstante, a la fecha del fallo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no había llegado a la conclusión de que una pena de prisión perpetua sin la posibilidad de libertad condicional contraviniera en sí misma ese artículo. El tribunal señaló que, sobre la base de la nota de fecha 26 de junio de 2001 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el autor tendría la posibilidad de recurrir el fallo dictado en los Estados Unidos y pedir un nuevo proceso por no haber estado presente cuando se dictó la sentencia. Según la misma nota, si la moción del autor tenía éxito se le sometería a un nuevo proceso. El tribunal decidió que no era seguro que el autor fuera a cumplir una pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional y que, por lo tanto, no

estaba confirmado que esa pena se ejecutara en la práctica. El tribunal llegó a la conclusión de que si se extraditara al autor, no se infringiría el artículo 3 del Convenio. El tribunal procedió luego a considerar si este artículo también sería pertinente si se extraditase a alguien a un país en que las condiciones de su detención fueran incompatibles con sus disposiciones. A juicio del tribunal, ni la información general de que disponía ni los hechos de la causa indicaban que el autor sería objeto en los Estados Unidos de un trato incompatible con el artículo 3 del Convenio<sup>4</sup>.

2.6 El 10 de mayo de 2002 el Ministro de Justicia autorizó la extradición del autor a los Estados Unidos, que se efectuó el 9 de junio de ese año.

2.7 El autor dice que el Ministerio de Justicia austríaco, en un escrito presentado al Tribunal Administrativo de Austria el 6 de junio de 2002, declaró que las cartas de los Estados Unidos eran "declaraciones internacionales vinculantes". En el escrito se puntualizaba entre otras cosas que, "dado que la ejecución de la parte del veredicto relativa al cargo 93 no es posible en los Estados Unidos [...], se debe dictar en ese país, a petición del Gobierno, una nueva sentencia que tendría que referirse a todos los cargos, a causa de la interconexión de los hechos". También se indicaba que el autor, si era extraditado, "tendría derecho a una apelación ilimitada, ya que las apelaciones por separado contra el veredicto y contra la condena no son admisibles cuando se trata de una sentencia definitiva".

2.8 Tras la extradición del autor, el Gobierno de los Estados Unidos pidió al Tribunal del Distrito Medio de Florida (División de Orlando) que sentenciara de nuevo al autor de conformidad con la orden por la que había sido extraditado de Austria (principio de especialidad). Concretamente, el Gobierno pidió al tribunal que sentenciara de nuevo al autor respecto de todos los cargos por los que había sido declarado culpable, excepto el cargo 93, relativo a la obstrucción a la justicia. El 15 de agosto de 2002, el tribunal rechazó la petición del Gobierno de los Estados Unidos, por considerar que la causa se diferenciaba de la inmensa mayoría de las causas en que se aplicaba el principio de especialidad a una extradición, ya que, excepto en contados casos, la extradición se lleva a cabo antes del juicio, y el principio de especialidad determina los cargos por los que el Estado requirente puede enjuiciar al acusado. El tribunal resolvió que una condena no se podía modificar por voluntad del Gobierno, de conformidad con el principio de la separación de poderes, y que el Gobierno no había citado ningún precedente que facultara al tribunal para modificar la condena impuesta al autor. Añadió que si el Gobierno aducía el principio de especialidad, ello no era para limitar los delitos por los que se pudiera procesar al autor, sino para modificar una sentencia válida del tribunal. Las circunstancias en que un tribunal de distrito puede modificar o anular una sentencia estaban limitadas estrictamente por la ley y por las Normas Federales de Procedimiento Penal, que no abarcaban las circunstancias de este caso. El tribunal se remitió a jurisprudencia anterior de los Estados Unidos relativa a la extradición, que confirmaba que, con arreglo a la doctrina constitucional de la separación de poderes, estaba prohibido dictar una nueva sentencia.

2.9 El 29 de agosto de 2002, el Gobierno de los Estados Unidos presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito de los Estados Unidos. El 10 de octubre de ese año, el Gobierno pidió que se suspendiera la apelación en el Undécimo Circuito, en espera de la autorización del Adjunto del Fiscal General del Departamento de Justicia para recurrir la decisión del juez de 15 de agosto de 2002. El 23 de diciembre, el Gobierno de los Estados Unidos pidió en el Undécimo Circuito que se desestimase la apelación, con efecto de cosa juzgada, indicando que el Adjunto del Fiscal General no autorizaba a recurrir la decisión del juez. El 8 de enero de 2003, el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito aceptó la petición del Gobierno, desestimó la apelación con efecto de cosa juzgada y resolvió que la decisión del juez era firme.

<sup>4</sup> Véase el fallo del Tribunal Superior Regional de Austria de fecha 8 de mayo de 2002, pág. 27.

2.10 Tras denegársele el proceso de apelación que las autoridades de los Estados Unidos habían garantizado a las autoridades del Estado parte, el autor inició lo que se conoce como petición de *habeas corpus* con arreglo al artículo 2241 ante el Tribunal del Distrito Central de Florida, alegando que los Estados Unidos habían incumplido sus obligaciones convencionales para con Austria puesto que no le permitían interponer un recurso contra su declaración de culpabilidad y contra su condena después de regresar a los Estados Unidos. Afirmó que los Estados Unidos habían inducido deliberadamente a las autoridades austríacas a creer que, además de anular la pena impuesta con respecto al cargo 93, el autor sería sentenciado de nuevo y podría interponer un recurso de apelación plena contra la declaración de culpabilidad y contra la nueva condena. Por consiguiente, los Estados Unidos habían violado el principio de especialidad. Esas actuaciones constituyen un motivo de litigio totalmente nuevo en los Estados Unidos y estaban pendientes de resolución en el momento en que se presentó esta comunicación.

### **La denuncia**

3.1 En la comunicación N° 1086/2002 el autor afirmaba, entre otras cosas, que su extradición a los Estados Unidos constituía una violación del artículo 14, párrafo 5, porque no podía apelar contra la declaración de culpabilidad ni contra la condena, dictadas ambas en rebeldía. El autor aducía que su extradición constituía una violación de los derechos que le asistían en virtud del artículo 7, ya que se enfrentaría a 845 años de prisión como consecuencia de la condena que se le había impuesto, lo que constituía un trato inhumano y degradante. El autor señaló a este respecto que el Ministro de Justicia había autorizado finalmente la extradición del autor a los Estados Unidos, sin hacer referencia alguna a sus derechos humanos<sup>5</sup>.

3.2 El autor señala que el Comité, en su dictamen, optó por no examinar esos dos aspectos de la reclamación del autor so pretexto de que, si lo hiciera, se fundaría en hechos hipotéticos. El Comité adoptó esa decisión basándose en las garantías dadas por los Estados Unidos al Estado parte.

3.3 Tras la extradición del autor, el Estado parte no se cercioró adecuadamente de la validez de las garantías dadas por los Estados Unidos. Aunque su pena se ha reducido o se reducirá a 711 años por razones técnicas, el autor no ha podido apelar contra ella ni contra la declaración de culpabilidad. Al no cerciorarse de la validez de las garantías recibidas, el Estado parte ha denegado al autor sus derechos de apelación. Además, el autor considera que la imposición de una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional constituye un trato y una pena inhumanos y degradantes, en violación del artículo 7 del Pacto.

3.4 A título de reparación, el autor solicita que el Comité pida al Estado parte que a su vez pida a las autoridades de los Estados Unidos que le permitan apelar de forma efectiva tanto contra la declaración de culpabilidad como contra la condena, o, subsidiariamente, que el Estado parte solicite el regreso del autor a su jurisdicción y se reinicie el proceso de extradición en consonancia con las obligaciones que el Pacto impone al Estado parte.

---

<sup>5</sup> El autor cita los términos del tratado, que dispone lo siguiente: "Condenas en rebeldía. Si la persona buscada ha sido declarada culpable en rebeldía, la autoridad ejecutiva del Estado requerido podrá denegar la extradición, a menos que el Estado requirente proporcione información o dé garantías que el Estado requerido considere suficientes para demostrar que la persona tuvo una oportunidad adecuada de defenderse o dispone de recursos o procedimientos complementarios adecuados después de la entrega".

### Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1 El 30 de enero de 2009, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo. El Estado parte señala que, según la información de que dispone, el autor no ha expresado hasta la fecha, en las actuaciones iniciadas contra él en los Estados Unidos, su consentimiento incondicional a que la pena de prisión que se le impuso se reduzca en la parte relativa al cargo 93 ("perjurio en un proceso en su contra"). Ahora bien, el tribunal austríaco y el Ministerio Federal de Justicia de Austria declararon inadmisibles la extradición en lo que se refería solamente a ese cargo. Sin embargo, se dice que el autor ha impugnado directamente la legalidad de todo el proceso de extradición en los Estados Unidos y ha sostenido que los Estados Unidos obtuvieron su extradición por medios equívocos<sup>6</sup>. El Estado parte considera que Austria no es ni parte ni tercero interesado en la causa que se sustancia contra el autor en los Estados Unidos.

4.2 El autor sostiene que las cartas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de fechas 8 de febrero y 14 de mayo de 2002 le garantizaban, sin ningún otro requisito, la plena apelación y la iniciación de un nuevo proceso. El Estado parte interpreta esas cartas de forma diferente. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se limitó a declarar, sobre la base del principio de especialidad, que, en caso de que la extradición para la ejecución de la pena no se concediera respecto de ciertas partes de la sentencia, la pena se reduciría. El autor todavía puede interponer los recursos legales<sup>7</sup> previstos en el ordenamiento jurídico estadounidense para oponerse a la reducción de la pena, lo que posteriormente podría también darle derecho a interponer la plena apelación y a que se iniciasen unas actuaciones penales totalmente nuevas. El Estado parte hace referencia a este respecto al párrafo 9.3 del dictamen del Comité en relación con la comunicación N° 1086/2002.

4.3 El Estado parte subraya que ha pedido en repetidas ocasiones a los Estados Unidos que cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional respecto de la aplicabilidad del principio de especialidad, concluyendo el proceso que sigue pendiente en los Estados Unidos. Según la decisión no motivada adoptada por el Tribunal del Distrito Medio de Florida (División de Ocala) el 15 de diciembre de 2008 en relación con el procedimiento de *habeas corpus* abierto por el autor contra los Estados Unidos<sup>8</sup>, el tribunal podía modificar la condena impuesta en lo que se refería al cargo 93, que se declaró inadmisibles. Sin embargo, esto indica que las actuaciones sobre la reducción de la condena estaban todavía pendientes en los Estados Unidos en el momento en que se presentó la comunicación.

4.4 El Estado parte sostiene que, según el artículo 1 del Protocolo Facultativo, el Comité solo puede recibir y examinar comunicaciones respecto de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado que sea parte en el Pacto y en el Protocolo Facultativo y que sostengan que han sido víctimas de una violación, por ese Estado parte, de los derechos reconocidos en el Pacto. Dado que las actuaciones que se refieren a la reducción de la pena siguen pendientes en los Estados Unidos, el autor no es víctima de una violación de los derechos reconocidos en el Pacto. Además, la comunicación que se examina se refiere a la forma de proceder de los Estados Unidos, que, según se afirma, no tuvieron suficientemente en cuenta el principio de especialidad con respecto a la extradición del autor. Por tanto, la comunicación debe declararse inadmisibles con arreglo al artículo 1 del Protocolo Facultativo, dado que va dirigida contra la forma de proceder de los Estados Unidos.

<sup>6</sup> El autor solicitó un mandamiento de *habeas corpus* para ser puesto en libertad, alegando que los Estados Unidos habían infringido el tratado de extradición firmado con Austria.

<sup>7</sup> El Estado parte no menciona los recursos legales a los que hace referencia.

<sup>8</sup> Causa N° 5: 02-Ov-204-Oc-10 rj.

4.5 En la presente comunicación se pide que se proceda a un nuevo examen del caso examinado previamente por el Comité en la comunicación N° 1086/2002, y se denuncia una violación del artículo 7 y del artículo 14, párrafo 5. El Comité aprobó su dictamen el 3 de abril de 2002, y desde esa fecha no se ha producido ningún cambio en los hechos esenciales del caso. La comunicación, por consiguiente, es inadmisible, dado que la cuestión ha sido dirimida y el Protocolo Facultativo no contiene disposición alguna que prevea un nuevo proceso o la reapertura de casos ya examinados por el Comité.

4.6 En lo que respecta a la alegación del autor de que no puede impugnar ante los tribunales de Austria las persistentes violaciones del Pacto, el Estado parte contesta que ha cumplido plenamente lo dispuesto en el párrafo 11.1 del dictamen relativo a la comunicación N° 1086/2002, puesto que obtuvo las declaraciones pertinentes de los tribunales y las autoridades competentes de los Estados Unidos y sigue obteniendo regularmente información sobre el proceso pendiente en los Estados Unidos. Además, el autor tenía derecho a exigir responsabilidades a los poderes públicos en relación con su extradición, ya que el Tribunal Administrativo de Austria dio efecto suspensivo a su demanda, pero no lo ha hecho. Por tanto, no ha hecho todo lo que podía para agotar los recursos de la jurisdicción interna de conformidad con el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo.

4.7 El Estado parte concluye que la comunicación debe declararse inadmisible y que de ella no se desprende que haya habido violación alguna del Pacto.

#### **Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte**

5.1 El 28 de mayo de 2009 el autor presentó sus comentarios a las observaciones del Estado parte, que, a su juicio, no tienen en cuenta los elementos de fondo de la comunicación.

5.2 En lo referente a la admisibilidad, el autor responde que la comunicación está íntimamente relacionada con la comunicación N° 1086/2002 y se basa en los mismos hechos, que satisficieron los criterios de admisibilidad en el caso de la comunicación original y que, por consiguiente, siguen satisfaciéndolos ahora. Lo que constituye una novedad en la comunicación que se examina es la prueba evidente de que la actuación del Estado parte indujo a error al Comité.

5.3 El hecho de que el Estado parte no se cerciorase debidamente de las garantías dadas por el Gobierno de los Estados Unidos indujo a error al Comité en un aspecto crucial. El dictamen del Comité sobre la comunicación N° 1086/2002 habría sido diferente si el Comité no hubiera confiado en esas garantías inexactas. Durante todo su proceso de extradición, y en su comunicación original, el autor impugnó la veracidad de las garantías.

5.4 En las observaciones del Estado parte se plantea la posibilidad de un recurso interno. Este argumento también se adujo en relación con la comunicación N° 1086/2002, y el Comité no lo consideró convincente. El autor considera que no hay razón alguna para que el Comité se aparte de su anterior posición, ya que el supuesto recurso para exigir responsabilidades a los poderes públicos no es un recurso efectivo.

5.5 El autor aduce además que, con arreglo al Pacto, sigue siendo víctima de actos del Estado parte. Su extradición a los Estados Unidos, donde se están produciendo las violaciones denunciadas del Pacto, no puede exonerar al Estado parte de su responsabilidad y de su obligación de no exponer al autor a la violación de sus derechos. Este principio, originalmente derivado de la doctrina de la no devolución, es un elemento implantado y no controvertido del derecho internacional de los derechos humanos. El Estado parte, al aseverar que la comunicación del autor va dirigida contra los Estados Unidos, no reconoce que hubo complicidad directa del Estado parte al exponer al autor a violaciones del Pacto.



5.6 El autor sigue estando convencido de que el anterior dictamen del Comité se aprobó sobre la base de las garantías recibidas de Austria, que el Comité consideró dignas de crédito. El autor acepta que, en alguna ocasión, el Comité deba basarse en las garantías que le dé el Estado parte. No obstante, para ello el Comité tiene que estar seguro de la exactitud de esas garantías, particularmente cuando conllevan un riesgo real y personal de que se viole la prohibición de infligir un trato inhumano y degradante y de que no se respeten los elementos fundamentales de un juicio imparcial. Al no cerciorarse adecuadamente de las garantías dadas por los Estados Unidos, el Estado parte sigue conculcando los derechos que asisten al autor con arreglo al Pacto. Por lo tanto, el autor seguirá siendo víctima hasta que se le permita interponer uno o varios de los recursos propuestos a que hace referencia la presente comunicación. El simple traslado del autor a otro país no exonera de sus obligaciones al país que lo envía. Si lo hiciese, se estaría socavando la eficacia del Pacto y los Estados partes podrían tratar de eludir el cumplimiento de sus obligaciones creando lo que en realidad sería un procedimiento de expulsión ficticio.

5.7 En cuanto al fondo, el autor no considera necesario abordar ninguna de las cuestiones relativas al principio de especialidad con respecto al cargo 93 ("perjurio en un proceso en su contra"). Lo que es pertinente al respecto es que, según ese principio, en este proceso de extradición se debería haber considerado como condición vinculante para la extradición del autor a los Estados Unidos el derecho de plena apelación contra la totalidad del proceso penal incoado contra el autor, incluida la posibilidad de que se dictara sentencia en un nuevo proceso. Según las garantías recibidas, las autoridades de los Estados Unidos dictarían una nueva sentencia respecto de todos los cargos por los que se había condenado al autor, y no se limitarían a reducir su condena eliminando el cargo 93. En realidad, el autor fue informado posteriormente de la jurisprudencia vigente en los Estados Unidos según la cual un tratado de extradición no faculta al tribunal para modificar sentencias en vigor, pero el poder ejecutivo estaría obligado por el principio de especialidad, por lo que la condena podría reducirse para dar cumplimiento a ese principio. En apoyo de la conclusión de que el autor no tiene posibilidad alguna de apelar en los Estados Unidos, el autor presenta copia de una declaración jurada del Profesor Daniel J. Capra<sup>9</sup> en la que este afirma que, aunque el Gobierno de los Estados Unidos pidió el 22 de junio de 2001 al Tribunal de Apelación que restableciese el derecho de apelación del autor, el plazo para apelar en esa jurisdicción había expirado hacía largo tiempo, y el Tribunal de Apelación rechazó la petición del Gobierno. El Profesor Capra añade que, en este punto, el autor no puede recurrir la declaración de culpabilidad ni la condena que se le impuso y no hay en los Estados Unidos mecanismo alguno que permita al autor interponer un recurso de apelación. Aunque el autor sabía que no había un proceso de apelación efectivo en los Estados Unidos, se sometió a todo el proceso, que confirmó su imposibilidad de apelar, y sigue intentando que se le conceda esa posibilidad.

5.8 En cuanto al procedimiento de *habeas corpus* ante los tribunales federales de los Estados Unidos, el autor sostiene que no formaba parte de las garantías dadas por las autoridades de los Estados Unidos ni figuraba en la comunicación original del autor ante el Comité, por lo que tampoco forma parte de la comunicación que se examina. En todo caso, el recurso de *habeas corpus*, aunque prosperase, haría que el autor quedara en libertad después de haber cumplido la parte de cumplimiento imperativo de su pena. Teniendo en cuenta que la condena del autor es de 845 años, esto significa que podría pedir amparo al tribunal tras cumplir 835 años de prisión (menos el tiempo descontado por buena conducta). El autor añade que esas actuaciones llevarán tiempo, lo que pone de manifiesto un problema general de lentitud de los procesos judiciales en los Estados Unidos, problema que el Estado parte debería también haber tenido en cuenta antes de aceptar las garantías.

<sup>9</sup> Catedrático de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Fordham.

5.9 El autor adjunta una copia de una carta de fecha 22 de octubre de 2008 enviada por el Canciller austriaco al Presidente de los Estados Unidos, en la que el Canciller señala que la extradición del autor se autorizó en 2002 porque se confiaba en las garantías recibidas en el sentido de que el autor sería sentenciado de nuevo y podría presentar un recurso de apelación plena contra la declaración de culpabilidad y contra la condena; que, una vez transcurridos seis años, el autor no había sido sentenciado de nuevo ni había podido presentar un recurso de apelación plena; que una posibilidad de resolver la cuestión rápidamente sería que el Presidente conmutara la pena impuesta al autor por otra de diez años, que es la pena máxima que se le habría impuesto si hubiera sido juzgado en Austria por los mismos delitos, y que otro factor que se debería tener en cuenta a los efectos de la conmutación era que el autor había sido sometido a una operación de cáncer de colon y se encontraba en mal estado de salud. El autor agradece la intervención del Estado parte, pero la considera insuficiente para proteger los derechos que le asisten en virtud del Pacto. El autor señala que el Estado parte no ha hecho referencia a esa carta en sus observaciones.

### Observaciones adicionales del Estado parte

6.1 En nota de 22 de julio de 2009, el Estado parte formuló observaciones adicionales. Reitera que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en sus notas de 8 de febrero y de 14 de mayo de 2002, señaló que, en su opinión, el autor tenía derecho a interponer todos los recursos disponibles en el sistema judicial estadounidense<sup>10</sup> para impugnar la decisión de volver a fijar la pena reduciéndola, lo que le permitiría posteriormente apelar contra la totalidad del fallo. El autor parece ignorar estas posibilidades cuando no se refiere en su respuesta al hecho de que Austria no autorizó la extradición por todos los cargos por los que se había dictado la sentencia. Por otra parte, el autor no niega que el procedimiento de *habeas corpus* tendrá como resultado una reducción de la pena en los Estados Unidos, ya que su extradición para la ejecución de la pena se denegó con respecto al cargo 93. En opinión del Estado parte, el principio de especialidad se cumplirá mediante la reducción de la pena con respecto al cargo 93. Además de esa reducción, el autor podrá impugnar la totalidad de la decisión en el marco del proceso de *habeas corpus*, si finalmente se acoge a él. Según la información de que dispone el Estado parte, el autor no solicitó previamente una reducción de la pena, sino una declaración de invalidez de su extradición por haberse obtenido fraudulentamente, por lo que debería ser puesto en libertad inmediatamente. Sin embargo, esa solicitud no está comprendida en el principio de especialidad ni se desprende de las explicaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos antes mencionadas.

6.2 El Estado parte sostiene que la prolongación del procedimiento a que hace referencia el autor se debe también a que este solicitó primeramente su inmediata puesta en libertad.

6.3 Por otro lado, el autor presenta una declaración jurada del Profesor Capra, de fecha 24 de agosto de 2007. Esa declaración jurada ya no tiene vigencia tras la decisión no motivada adoptada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos competente<sup>11</sup> que autoriza al autor a seguir el procedimiento de *habeas corpus* como medio admisible de invocar el principio de especialidad. En su decisión, el Tribunal de Distrito dio al autor la posibilidad de que se volviera a consignar el fallo de febrero de 2000 de forma idéntica en todos los aspectos, salvo que se suprimiría toda referencia al cargo 93 del auto de acusación y que se omitiría toda referencia a las sanciones penales relativas al cargo 93 o toda acumulación de ellas. El tribunal añadió que ese resultado daría cumplimiento al principio de especialidad dimanante del rechazo de Austria a extraditar al autor con respecto al cargo 93, y permitiría al autor ejercer su anterior derecho de apelación plena contra la

<sup>10</sup> Como se ha señalado anteriormente, el Estado parte no indica a qué recursos legales se refiere.

<sup>11</sup> Véase el párrafo 4.4 *supra*.

declaración de culpabilidad y contra la condena, rectificando de este modo la vulneración del tratado alegada en su petición de *habeas corpus*. El Estado parte añade que, aunque la observancia del principio de especialidad es una obligación entre Estados soberanos, hay que tener en cuenta que la persona extraditada ha adoptado las medidas procesales a las que tenía derecho y que cabía razonablemente esperar de ella con miras al cumplimiento de ese principio.

6.4 El hecho de que el Estado parte solicitara repetidamente de las autoridades estadounidenses que concluyeran el procedimiento aún pendiente en los Estados Unidos no puede considerarse una admisión de que el Estado parte ha incumplido las obligaciones que le impone el Pacto. Por el contrario, de ese modo el Estado parte cumple el párrafo 11.1 del dictamen del Comité relativo a la comunicación N° 1086/2002, ya que sigue obteniendo información sobre el procedimiento pendiente en los Estados Unidos. La sugerencia formulada el 22 de octubre de 2008 por el ex Canciller de Austria al Presidente de los Estados Unidos, sugerencia que se basaba de forma bastante evidente en consideraciones humanitarias<sup>12</sup>, no puede en modo alguno modificar esa situación. Por consiguiente, el Estado parte pide al Comité que declare inadmisibile la comunicación a tenor del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

### **Observaciones adicionales del autor**

7.1 El 9 de enero de 2012, el autor informó al Comité de las sentencias dictadas en primera instancia y en apelación en relación con el recurso de *habeas corpus*. El Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito confirmó, en particular en su sentencia de 20 de abril de 2010, que el principio de especialidad exigía que se anulase el cargo 93 y que la nueva sentencia permitiría al autor apelar contra su nueva condena y contra la declaración de culpabilidad original. Tras llegar a esta conclusión, el tribunal determinó que se podía proceder a las actuaciones encaminadas a dictar la nueva sentencia sobre la base de la apelación plena contra la declaración de culpabilidad y contra la condena. En opinión del autor, esas actuaciones no resuelven la cuestión, ya que las garantías recibidas por el Estado parte consistían en que el autor recibiría una nueva sentencia respecto de todos los cargos por los que se lo condenó, y no solo respecto del cargo 93.

7.2 El 12 de enero de 2012, el autor añadió que su apelación al Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal de Apelación había sido desestimada el 18 de abril de 2011. Con arreglo a la sentencia del Tribunal de Apelación, los argumentos del autor para que se proceda a dictar una nueva sentencia con exclusión del cargo 93 se verán el 30 de noviembre de 2012. Actualmente el autor está recluso en la prisión de alta seguridad de Canaan, en los Estados Unidos.

### **Deliberaciones del Comité**

#### *Examen de la admisibilidad*

8.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si dicha comunicación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

8.2 En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

<sup>12</sup> En su carta, el Canciller señala que otro aspecto que se debe tener en cuenta para la conmutación es que el autor fue operado de cáncer de colon, que se encuentra en mal estado de salud y que está dispuesto a aceptar una conmutación de su pena por otra de diez años de prisión.

8.3 El Estado parte aduce que los recursos internos no se agotaron, ya que el autor no ha tomado medidas para exigir responsabilidades a los poderes públicos en relación con su extradición, lo que, según se afirma, hizo posible el Tribunal Administrativo de Austria. El Comité toma nota de la respuesta del autor de que el supuesto recurso para exigir responsabilidades a los poderes públicos no es efectivo. Recordando su dictamen respecto de la comunicación N° 1086/2002, el Comité considera que el Estado parte no ha demostrado que los recursos sugeridos sean efectivos, dado que el autor fue extraditado y actualmente está encarcelado en los Estados Unidos de América. En consecuencia, el Comité concluye que el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo no obsta para que examine la comunicación.

8.4 En lo que respecta al argumento del Estado parte de que el autor no es víctima en el sentido del artículo 1 del Protocolo Facultativo, el Comité observa que la reclamación se presentó contra Austria como Estado parte en el Protocolo Facultativo y que en ella se señala que el Estado parte no se aseguró de que el autor no sufriera una violación de los derechos que le confiere el Pacto como resultado de su extradición de Austria a los Estados Unidos de América. La presente comunicación se refiere a las denuncias formuladas por el autor con arreglo al artículo 14, párrafo 5, y al artículo 7 del Pacto, que el Comité consideró prematuro abordar cuando aprobó su dictamen respecto de la comunicación N° 1086/2002. El autor sostiene que, a causa de su extradición a los Estados Unidos de América, el Estado parte es responsable de las violaciones de los derechos que le asisten en virtud del Pacto. Por consiguiente, el Comité considera que el autor tiene la condición de víctima en el sentido del artículo 1 del Protocolo Facultativo, y que la cuestión a la que se refiere esta comunicación es distinta de la cuestión examinada en la comunicación N° 1086/2002.

8.5 En lo que respecta a las denuncias formuladas por el autor con arreglo al artículo 14, párrafo 5, que el Estado parte considera inadmisibles, el Comité señala que en el marco del procedimiento de *habeas corpus* iniciado por el autor, el 20 de abril de 2010 el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos dictó una sentencia que confirmaba la opinión no motivada del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, de fecha 15 de diciembre de 2008, según la cual era efectivamente posible volver a consignar la sentencia pronunciada en febrero de 2000 suprimiendo el cargo 93 y calcular de nuevo la pena sin tener en cuenta ese cargo, con la consiguiente posibilidad de presentar una apelación plena contra la declaración de culpabilidad y la pena. El tribunal concluyó que, tras resolver que el Tribunal de Distrito estaba facultado para dictar una nueva sentencia y para autorizar al autor a presentar un recurso de apelación plena contra la declaración de culpabilidad y contra la pena sin que se tuviera en cuenta el cargo 93, podía proseguir la causa inicialmente incoada ante el Tribunal de Distrito tras la extradición del autor. El Comité toma nota de que, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Apelación, la vista de la causa, en que se ha de dictar una nueva sentencia con exclusión del cargo 93, está prevista para el 30 de noviembre de 2012.

8.6 A la luz de lo que antecede, el Comité concluye que la reclamación del autor en virtud del artículo 14, párrafo 5, no se ha fundamentado suficientemente a los efectos de la admisibilidad en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

8.7 En lo que respecta a la reclamación en virtud del artículo 7, el Comité considera que está debidamente fundamentada a los efectos de la admisibilidad y procede a examinarla en cuanto al fondo.

#### *Examen de la cuestión en cuanto al fondo*

9.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

9.2 El Comité tiene que decidir si en el momento de la extradición el Estado parte determinó, a la vista de la información de que disponía entonces, que el autor correría un peligro real de sufrir una infracción del artículo 7 del Pacto.

9.3 El Comité toma nota del argumento del autor de que su extradición a los Estados Unidos de América, donde correría un riesgo real de ser condenado a cadena perpetua por un delito contra la propiedad, sin posibilidad de libertad condicional, constituye un trato o pena inhumano o degradante en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Pacto. El Comité observa que, en su fallo de fecha 8 de mayo de 2002, el Tribunal Superior Regional de Austria señaló que, si bien la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos<sup>13</sup> admitía que la extradición a un país en que alguien pudiera ser condenado a la pena de prisión perpetua podía plantear cuestiones en relación con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, nunca había llegado a la conclusión de que una pena de prisión perpetua sin la posibilidad de libertad condicional contraviniera en sí misma ese artículo; el artículo 3 del Convenio es similar al artículo 7 del Pacto. El Comité observa además que, en la causa del autor, el tribunal austríaco basó su decisión de que la extradición no constituiría trato o pena cruel, inhumano o degradante en la forma en que interpretaba las seguridades recibidas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que el autor disponía de diversas posibilidades para apelar su condena.

9.4 Aún reconociendo que la deportación de una persona a un país en el que cumplirá lo que es, a todos los efectos prácticos, una condena a cadena perpetua sin posibilidad de liberación condicional como la impuesta al autor puede suscitar cuestiones relacionadas con el artículo 7 del Pacto, a la luz de los objetivos de la pena, enunciados en el artículo 10, párrafo 3, del Pacto, el Comité considera que la decisión del Estado parte de extraditar al autor a los Estados Unidos de América debe sopesarse teniendo en cuenta la situación en derecho en el momento en que tuvo lugar la presunta violación. A este respecto, la información facilitada al Comité por ambas partes en el curso del procedimiento parece indicar que el Estado parte basó su decisión de extraditar al autor a los Estados Unidos de América en el minucioso examen realizado por el Tribunal Superior Regional de Austria de las pretensiones del autor a la vista de los hechos de la causa y del derecho a la sazón aplicable. En consecuencia, el Comité considera que, al extraditar al autor, el Estado parte no vulneró los derechos que le asisten con arreglo al artículo 7 del Pacto.

10. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que la información que tiene ante sí no pone de manifiesto una violación del artículo 7 del Pacto.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto inglés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

---

<sup>13</sup> Véase más recientemente el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa *Babar Ahmad and others v. The United Kingdom*; 24 de septiembre de 2012, demandas N<sup>os</sup> 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 y 67354/09.